



Aprendizajes y experiencias previas frente a los (posibles) procesos de exclusión social y territorial en el medio rural tras el COVID-19

Jaime Escribano Pizarro
Diana E. Valero López

CONTACTO

SITIO WEB:

<https://www.uv.es/iidlvalencia>

CORREO ELECTRÓNICO:

jaime.escribano@uv.es

diana.valero@uv.es

A inicios del 2020, si había un desafío global claro en la agenda política internacional y local era el de la emergencia climática, que enmarcaba el planteamiento de los ODS en un contexto de estabilidad económica y crecimiento. No obstante, la pandemia del COVID-19 ha invertido dicho escenario y cambiado por completo las reglas de juego a todas las escalas.

A nivel mundial, si bien la gestión de la pandemia ha sido distinta de unos países a otros, una de las primeras medidas para hacerla frente en todos ellos ha sido la limitación de casi toda actividad socioeconómica. Como resultado, nadie duda ya de la inminencia de una considerable crisis económica en términos de desempleo y limitación de recursos económicos y financieros disponibles. Por desgracia, ejemplos pasados demuestran que ambos aspectos contribuyen rápidamente al desarrollo de procesos de exclusión, pobreza y privación que afectarán, sobre todo, a los colectivos y territorios ya de por sí más vulnerables.

Para intentar frenar o mitigar los efectos de esta inminente crisis, los distintos gobiernos han anunciado ya diversos paquetes de medidas orientados a frenar las consecuencias previstas (paro, decrecimiento económico, pérdida del poder adquisitivo familiar, etc.). No obstante, los primeros datos parecen indicar que nuevas (y viejas) situaciones de exclusión social y de pobreza están llegando ya para instalarse durante un tiempo.

Todo ello, cuando además el impacto de la crisis de 2008-2015 en la sociedad española apenas se ha superado por completo, particularmente a nivel micro. Desde un punto de vista relativamente pragmático, la experiencia adquirida debería permitirnos aprender de los errores cometidos y gestionar mejor esta nueva crisis económica, intentando no dejar a nadie atrás, especialmente a los que ya se sienten olvidados en sus "no-lugares".

Porque si hay una evidencia clara alrededor de la incidencia del COVID-19 en el territorio español, es que sus tradicionales desequilibrios sociodemográficos y económicos entre regiones, plantean nuevas cuestiones alrededor de la forma en que los espacios rurales experimentan la crisis del Coronavirus, y si estos cuentan con los recursos y el capital humano adecuado (en cantidad y tipología) para responder eficazmente.

Si bien las ciudades españolas están siendo más afectadas por la pandemia debido a sus altas densidades de población, también es cierto que estas cuentan con un mayor y mejor acceso al sistema sanitario básico y especializado que no otros territorios. De ahí que no debemos subestimar en caso alguno, bajo visiones idílicas o bohemias de refugio y seguridad, la vulnerabilidad de ciertos territorios rurales. En particular, aquellos fuertemente envejecimientos, de reducido dinamismo económico y con una deficiente oferta de servicios públicos elementales, entre ellos, las telecomunicaciones e infraestructuras digitales, tal y como se está demostrando, particularmente útiles en esta ocasión.

Nada hace indicar, a priori, que los impactos negativos económicos y sociales que genere el COVID-19 en la sociedad española, vayan a ser diferentes de los experimentados ya durante la crisis de 2008. Si bien es cierto que al final, todo dependerá de la regresión del mercado laboral, de las

medidas de choque que ejecuten los gobiernos y, más que nunca, de la capacidad de resiliencia de las propias comunidades rurales.

En el primer caso, habrá que atender a la evolución del empleo en algunos de los sectores clave para el medio rural, como el turismo y la agricultura. En el inicio de la pandemia, todo parece apuntar que el turismo, especialmente el de carácter internacional, puede ser una de las ramas económicas más afectadas por el desempleo. En función de su adaptación a la situación dejada por la crisis sanitaria (hay quien apunta que los impactos pueden no ser tan negativos en ese sector, ya que una parte del turismo nacional podría redirigirse hacia aquí), habrá mayor o menor pérdida de empleo.

Por su parte, la agricultura se ha visto relativamente beneficiada por el brote de coronavirus, pues este ha dado lugar a una mayor conciencia e interés social por conocer los procesos y lugares de producción de los alimentos que consumimos. En consecuencia, hay cada vez más personas que, con nuevas conductas, compran con menos frecuencia, de forma más responsable y a través de proveedores locales, contribuyendo así al resurgimiento de la producción de alimentos a pequeña escala y de proximidad. La evolución del sector dependerá, en este caso, de los mayores o menores incentivos de acceso a la tierra a los pequeños productores y consumidores (individual y/o colectivamente).

En cualquier caso, lo que puede ser un factor de cambio que habrá que explorar son los efectos que la pandemia y sus medidas de control puedan tener sobre las dinámicas migratorias, y las posibilidades de "marcha" y de destinos que se planteen los individuos, familias y/o grupos sociales más afectados por el desempleo y la pérdida de ingresos en las zonas rurales.

Por otro lado, debemos advertir del riesgo que conlleva mantener la idealización del medio rural como lugar seguro en donde resguardarse del COVID-19, que puede hacer que los fenómenos de exclusión social, privación y pobreza queden (nuevamente) ocultos. No obstante, la activación reciente de marcos discursivos en torno a "la revuelta de la España vaciada", puede favorecer que estos procesos dejen de ser ignorados, de una vez por todas, tanto en el discurso social como en las propuestas político-económicas.

En cuanto a las acciones procedentes del ámbito público, la experiencia demuestra que las políticas de austeridad no son una solución viable con la que hacer frente a los procesos de exclusión social y de pobreza, independientemente de su origen. Más bien, el pasado reciente nos demuestra la necesidad de tener en cuenta a los agentes locales, las partes interesadas, los grupos comunitarios y las distintas escalas de gobierno. Es decir, fomentar y consolidar sistemas de gobernanza integradores, que adopten un enfoque territorial al proponer políticas de inclusión. Para ello, es imperativo que la comunicación y cooperación entre todos los actores con capacidad para intervenir en el territorio, pero especialmente los de carácter público, sea lo más clara posible, y que las personas que trabajen a diferentes escalas escuchen y aprendan de las interpretaciones de los demás.

A nivel local, es de esperar que los ayuntamientos del medio

rural mantengan de nuevo un perfil de actuación limitado económicamente (salvo la articulación de herramientas y/o fondos especiales), pero muy activo en cuanto a la atención de las necesidades de sus municipios. En particular, mediante la articulación de redes de ayuda vecinal y comunitaria, aspectos clave ya en las primeras fases de gestión de la pandemia al garantizar suministros de todo tipo a las personas y hogares vulnerables en (auto)aislamiento.

La crisis de 2020 parece apuntar también al florecimiento de iniciativas de innovación social para dar respuesta a los nuevos desafíos sociales, económicos e, incluso, de salud (hemos de ser conscientes que la salud mental de las personas no solo se ve afectada durante la pandemia, sino también en el futuro, al recordar los problemas vividos). Muchas sociedades rurales tienen redes comunitarias sólidas y están acostumbradas a depender de los recursos locales, en lugar de recibir apoyo del exterior: profundos sentimientos de pertenencia y arraigo, de cohesión social, sentido de comunidad, etc. Sin embargo, cabe averiguar mejor cómo se articularán estas iniciativas y qué procesos de consolidación seguirán, para lo que la política, nuevamente, jugará un papel clave, al poder reforzar (o ignorar) las capacidades previas de los espacios rurales para resolver los nuevos desafíos a los que se enfrentan.